REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. II Núm. 2 (2011): 1 – 15
- Crònica -

JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN NAVARRA (pp. 2-8)

—

JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A NAVARRA (pp. 9-15)

JOSÉ FRANCISCO ALENZA GARCÍA

Profesor titular de Derecho Administrativo / Professor titular de Dret Administratiu

Universidad Pública de Navarra

Sumario: 1. Introducción. 2. Anulación de autorización ambiental integrada de una granja con planta de biometanización de residuos orgánicos. 3. Condena a un ayuntamiento por ruidos excesivos en una pista polideportiva. 4. Sanciones ambientales. 5. Relación de sentencias.

1. Introducción

Las sentencias de contenido ambiental en los tribunales navarros durante el segundo semestre de 2011 no ofrecen apenas aspectos relevantes desde el punto de vista de la interpretación del Derecho ambiental. Me centraré principalmente en la anulación de una autorización ambiental integrada y en la condena a un Ayuntamiento por los ruidos excesivos procedentes de una pista polideportiva. En tercer lugar, agruparé las diversas sentencias que han recaído sobre sanciones ambientales para destacar los aspectos más interesantes.

Antes de entrar en el análisis pormenorizado de dichas sentencias, me referiré brevemente a otras resoluciones judiciales de menor interés. Por un lado, la Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 1, de 31 de octubre de 2011, sobre caducidad de la licencia de actividad clasificada por inactividad en la ejecución de la misma. La sentencia revoca la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra que había estimado el recurso presentado contra la declaración de caducidad. La sentencia declara que aunque la caducidad no opera de manera automática y debe acogerse con cautela, lo cierto es que una interpretación excesivamente flexible de los requisitos de la caducidad vulnera el principio de seguridad jurídica. En el caso concreto el expediente de declaración de caducidad se inicia 4 años después de la concesión de la licencia. Y aunque es cierto que la finca había sido ocupada indebidamente por un tercero, impidiendo la puesta en práctica de la actividad ganadera, esa circunstancia no se puso en conocimiento del Ayuntamiento durante el procedimiento de declaración de caducidad, ni siquiera después de que por sentencia firme se le devolviera la finca. Por ello, se considera ajustada a Derecho la declaración de caducidad.

Por otro lado, y para finalizar esta introducción, me limitaré a señalar dos sentencias sobre responsabilidad de la Administración por los daños producidos por animales protegidos. En un caso, por el accidente producido por el atropello de un corzo (Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 1, de 22 de septiembre de 2011); y, en otro, por los daños causados en el arbolado por ardillas, si bien en este caso se desestimó la reclamación por un error en la identificación de la parcela dañada (Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 1, de 19 de agosto de 2011).

2. Anulación de autorización ambiental integrada de una granja con planta de biometanización de residuos orgánicos

La STSJ de Navarra de 22 de octubre de 2011 se ocupó del recurso presentado por un Ayuntamiento contra la autorización ambiental integrada de una granja con planta de biometanización de residuos orgánicos ubicada en el término municipal colindante.

La anulación de la autorización se basa fundamentalmente en dos motivos: la vulneración de la normativa urbanística y la deficiencia del Proyecto Básico presentado para el otorgamiento de la autorización.

Para el examen de la adecuación a la legalidad urbanística se utilizan dos criterios: el grado de vinculación de las dos actividades proyectadas (granja con planta de biometanización de residuos) y la eficacia del informe de compatibilidad urbanística.

La primera cuestión es clave dado que en suelo no urbanizable sólo se permite la implantación de actividades industriales que estén vinculadas a usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos o de directa explotación de los recursos naturales que deban desarrollarse en suelo no urbanizable. Pues bien, a juicio del TSJ, la planta de biometanización de residuos orgánicos debe ser considerada como una actividad industrial propia que recibe suministro de residuos de la actividad ganadera autorizada y de otras terceras. Es una planta que conlleva una notable producción eléctrica y la implantación de placas fotovoltaicas. Por tanto, niega que se desarrolle una actividad complementaria de un uso ganadero, sino que se trata de una industria autónoma.

En cuanto al informe de compatibilidad urbanística que obra en el expediente, la sentencia hace una valoración muy dura del mismo. Para empezar afirma que "no puede ser considerado como tal" informe, puesto que "es tan escueto y tan exiguo, que no da razón alguna, ninguna, del acomodado de la AAI al ordenamiento urbanístico (…) Se limita a reproducir los usos permitidos y prohibidos, sin más, como si éstos no fueran conocidos". Más adelante considera de "suma gravedad" que el "pretendido informe" (*sic*) "intente dar vía libre a la AAI no a virtud del planeamiento vigente sino en el de un futurible, es decir, en la previsión de que en el futuro se va a aprobar un nuevo Plan General Municipal".

Con ser lo antedicho importante, la sentencia también considera, basándose en el informe pericial judicial, que el Proyecto Básico autorizado es deficiente e insuficiente, señalando como principales defectos: "sus carencias en el entorno medioambiental, la

realidad de la planta de biometanización como una actividad industrial principal y autónoma, la contaminación evidente del medio ambiente, el traslado altamente relevante a dicha planta de residuos del exterior, la existencia de una central de 2 MW imposible de cubrir sin tal aportación, la contaminación de acuíferos y aguas subterráneas perjudiciales en grado sumo, la nula evaluación de afecciones en el transporte de residuos, destrucción de la fauna y la flora irreversible, en especial para especies protegidas".

Consecuentemente con lo señalado, la sentencia estima el recurso y anula la autorización ambiental integrada.

3. Condena a un ayuntamiento por ruidos excesivos en una pista polideportiva

Como es sabido, los ruidos se han convertido en una fuente habitual de conflictos que terminan frecuentemente en los tribunales. Los agentes emisores de ruidos molestos pueden ser de los más insospechados. En el caso de la Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 3 de 21 de enero de 2011, se trataba de los ruidos procedentes de una pista polideportiva. La sentencia recuerda que la legislación de ruido somete a sus determinaciones a todos los emisores acústicos, sean de titularidad pública o privada, teniendo tal consideración cualquier elemento susceptible de generar niveles sonoros o vibraciones que puedan ser causa de molestias.

La inactividad de la entidad local demandada queda acreditada por las reiteradas denuncias y peticiones de los vecinos recurrentes que quedaron sin respuesta alguna. Y sobre todo se subraya que no se han adoptado "medidas reales y efectivas en la praxis para ajustar el uso y funcionamiento de la citada pista polideportiva a la normativa vigente, poniendo en marcha las medidas correctoras oportunas y eficaces para paliar la situación denunciada".

Tras insistir en que "la Administración no ha actuado con todos los medios disponibles a su alcance para aminorar los ruidos", recuerda la jurisprudencia constitucional sobre la potencialidad del ruido para afectar de forma sensible al medio ambiente y, además, para vulnerar el derecho a la intimidad personal y a la inviolabilidad del domicilio, así como la salud de la personas.

Probada la inactividad administrativa y la existencia de ruidos superiores a los permitidos, la sentencia condena al Ayuntamiento "para que lleve a cabo todas las

actuaciones necesarias a fin de que la actividad desarrollada en la pista polideportiva de Artica no produzca inmisiones de ruido superiores a las permitidas en la normativa vigente en la vivienda de los recurrentes, debiendo para ello adoptar todas las medidas precisas que le permite la legislación, sin que este Juzgado estime pertinente la clausura temporal o definitiva de la misma en los términos interesados por la parte actora en su escrito de demanda".

La sentencia, por tanto, se limita a condenar la inactividad de la Administración ordenándole la adopción de medidas correctoras. A mi juicio, peca de excesiva prudencia la sentencia al permitir al Ayuntamiento que —tan inactivo, pasivo y tolerante con los ruidos se había mostrado— escoja las medidas más apropiadas para terminar con los ruidos. Pero la sentencia, como si no confiara demasiado en la actitud del Ayuntamiento o pretendiendo aleccionarlo, recoge "a título de ejemplo" (sic) algunas de las medidas correctoras que podrían adoptarse:

> "la necesidad de cesar la totalidad de actividades que se realizan en la pista polideportiva en horario nocturno, la imposibilidad de programación de actividades musicales tanto en horario nocturno como en diurno, la necesidad de mejorar las condiciones de la pista, una reducción de la amplificación en la medida de lo posible a través de una disminución del tiempo de reverberación, la realización de un cerramiento de al menos parte de los laterales de la pista y de la parte trasera a fin de lograr un apantallamiento efectivo entra la pista y las viviendas, llevar a cabo una modificación del pavimento utilizando materiales absorbentes, la realización de un Estudio Acústico, implantar una regulación del horario de iluminación, entre otras medidas de posible realización".

La condena a la adopción de unas medidas correctoras resulta, en mi opinión, insatisfactoria, por vaga y genérica, sobre todo a la vista de la pasiva actitud demostrada en el asunto por el Ayuntamiento. Ojalá me equivoque, pero mucho me temo que el problema haya quedado sin resolver y que los vecinos tendrán que volver a los tribunales a pedir que se concreten las medidas que garanticen la correcta y completa ejecución de la sentencia.

4. Sanciones ambientales

La mayoría de las sentencias de este período han tratado de sanciones ambientales. Solo en una de ellas se anuló la sanción por no haberse acreditado debidamente, conforme a

lo exigido por la presunción de inocencia, la causalidad entre las sustancias vertidas y la actividad de la empresa sancionada (Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 1, de 4 de julio de 2011).

En las restantes sentencias se confirmaron las sanciones impuestas. Dos de ellas fueron en materia de caza. En la STSJ de Navarra de 29 de julio de 2011 se confirmó la sanción impuesta por el uso de munición prohibida y por la obstaculización de la labor inspectora de los policías, al tratar el imputado de esconder las armas utilizadas. La otra sentencia (STSJ de Navarra de 23 de marzo de 2011) tiene algo más de interés, especialmente, su afirmación de que la presunción de veracidad de los hechos constatados por policías basta para destruir la presunción de inocencia e inaplicar el principio de *in dubio pro reo*, porque despeja cualquier duda sobre los hechos. También se rechazó la vulneración de la prohibición del *bis in idem* porque el mismo hecho era constitutivo de dos infracciones (cazar en un coto para el que no se tiene licencia y cazar en un lugar acotado como reserva) y, además, se impuso una sola sanción.

En la Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 2 de 11 de octubre de 2011, se cuestionaron diversos aspectos formales y varios principios de la potestad sancionadora de la Administración. Finalmente se confirmó la sanción impuesta por exceso de emisiones. Por un lado, se rechazaron ciertas irregularidades temporales (la anticipación por un día de la incoación del procedimiento sancionador por el Departamento de Medio Ambiente sin esperar a que transcurriera el mes de inactividad de la Administración local) y formales (pliego de cargos que no contiene todos los requisitos legales) por considerar que no implicaban para el afectado una indefensión patente y real, ni la imposibilidad del acto de alcanzar su fin.

En cuanto al principio de culpabilidad se rechaza que se hubiera vulnerado al considerar que el recurrente "tuvo un largo plazo para adaptar sus instalaciones a las exigencias legales y reglamentarias, por lo que no cabe invocar la complejidad de la materia o los esfuerzos realizados". Tampoco se aprecia ilicitud en la calificación de la infracción como grave a pesar de que no se cuantifique el exceso de las emisiones hasta la resolución del recurso de alzada. Basta con la acreditación de que se superaban ampliamente los límites de emisiones para que la calificación de la infracción como grave se considere correctamente realizada. Finalmente, se rechaza la ausencia de proporcionalidad al haberse impuesto la sanción en su cuantía mínima.

5. Relación de sentencias

a) Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Sala de lo contencioso-administrativo).

STSJ de Navarra de 23 de marzo de 2011, ponente Galve Sauras. Sanción en materia de caza. Presunción de veracidad de los hechos constatados por funcionarios públicos. Vulneración del *non bis in idem* inexistente.

STSJ de Navarra de 29 de julio de 2011, ponente Merino Zalba. Confirmación de sanción en materia de caza por el uso de munición prohibida y por obstaculizar la labor inspectora.

STSJ de Navarra de 22 de octubre de 2011, ponente Merino Zalba. Anulación de autorización ambiental integrada de una granja con planta de biometanización de residuos orgánicos. Actividades no vinculadas a efectos urbanísticos y no autorizables en suelo no urbanizable. Informe de compatibilidad urbanística basado no en el plan vigente, sino en una futura modificación del planeamiento urbanístico.

b) Sentencias de los Juzgados de lo contencioso-administrativo.

Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 3, de 21 de enero de 2011. Condena a un Ayuntamiento para establecer las medidas necesarias para eliminar los ruidos excesivos en una pista polideportiva.

Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 1, de 4 de julio de 2011. Sanción por vertido que se anula por no probarse la causalidad entre las sustancias vertidas y la empresa sancionada.

Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 1, de 19 de agosto de 2011. Daños causados en arbolado por ardillas. Desestimación de la reclamación por error en la identificación de la parcela.

Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 1, de 22 de septiembre de 2011. Responsabilidad de la Administración como titular de la vía pública donde se produjo un accidente de circulación por atropello de un corzo.

Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 2, de 11 de octubre de 2011. Confirmación de sanción por exceso de emisiones. Irregularidades temporales y formales no invalidantes. Proporcionalidad y culpabilidad probadas.

Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 1, de 31 de octubre de 2011. Caducidad de la licencia de actividad clasificada por inactividad en la ejecución de la misma.

Sumari: 1. Introducció. 2. Anul·lació d'autorització ambiental integrada d'una granja amb planta de biometanització de residus orgànics. 3. Condemna a un ajuntament per sorolls excessius en una pista poliesportiva. 4. Sancions ambientals. 5. Relació de sentències.

1. Introducció

Les sentències de contingut ambiental en els tribunals navarresos durant el segon semestre de 2011 no ofereixen a penes aspectes rellevants des del punt de vista de la interpretació del dret ambiental. Em centraré principalment en l'anul·lació d'una autorització ambiental integrada i en la condemna a un ajuntament pels sorolls excessius procendents d'una pista poliesportiva. En tercer lloc, agruparé les diferents sentències que han estat pronunciades sobre sancions ambientals per destacar els aspectes més interessants.

Abans d'entrar en l'anàlisi detallada d'aquestes sentències, em referiré breument a altres resolucions judicials d'interès menor. D'una banda, la Sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 1, de 31 d'octubre de 2011, sobre caducitat de la llicència d'activitat classificada per inactivitat en l'execució de la mateixa. La sentència revoca la resolució del Tribunal Administratiu de Navarra, que havia estimat el recurs presentat contra la declaració de caducitat. La sentència declara que, malgrat que la caducitat no opera de manera automàtica i ha d'acollir-se amb cautela, és cert que una interpretació excessivament flexible dels requisits de la caducitat s'inicia quatre anys després de la concessió de la llicència. Malgrat que és cert que la finca havia estat ocupada indegudament per un tercer, impedint d'aquesta manera la posada en pràctica de l'activitat ramadera, aquesta circumstància no es va posar en coneixement de l'Ajuntament durant el procediment de declaració de caducitat, ni tan sols desprès de què, per sentència ferma, es produís la devolució e la finca. Per això, es considera que la declaració de caducitat és conforme a Dret.

D'altra banda, i per finalitzar aquesta introducció, em limitaré a assenyalar dues sentències sobre responsabilitat de l'Administració pels danys produïts per animals protegits. En un cas, per l'accident produït per l'atropellament d'un cabirol (Sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 1, de 22 de setembre de 2011); i, en l'altre, pels danys causats en l'arbrat per esquirols, si bé en aquest cas es va desestimar la reclamació per un error en la identificació de la parcel·la danyada (Sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 1, de 19 d'agost de 2011).

2. Anul·lació d'autorització ambiental integrada d'una granja amb planta de biometanització de residus orgànics

La STSJ de Navarra de 22 d'octubre de 2011 es va ocupar del recurs interposat per un ajuntament contra l'autorització ambiental integrada d'una granja amb planta de biometanització de residus orgànic ubicada en el terme municipal adjancent.

L'anul·lació de l'autorització es basa fonamental en dos motius: la vulneració de la normativa urbanística i la deficiència del Projecte Bàsic presentat per a l'atorgament de l'autorització.

Per a l'examen de l'adequació de la legalitat urbanística s'utilitzen dos criteris: el grau de vinculació de les dues activitats projectades (granja amb planta de biometanització de residus) i l'eficàcia de l'informe de compatibilitat urbanística.

La primera qüestió és clau, atès que en el sòl no urbanitzable només es permet la implantació d'activitats industrials que estiguin vinculades a usos agrícoles, ramaders, forestals, cinegètics o de directa explotació dels recursos naturals que hagi de dur-se a terme en sòl no urbanitzable. Doncs bé, a judici del TSJ, la planta de biometanització residus orgànics ha de ser considerada com una activitat industrial pròpia que rep subministrament de residus de l'activitat ramadera autoritzada i altres terceres. És una planta que comporta una producció elèctrica notable i la implantació de plaques fotovoltaïques. Per tant, nega que es desenvolupi una activitat complementària d'un ús ramader, sinó que considera que es tracta d'una indústria autònoma.

Quan a l'informe de compatibilitat urbanística que figura a l'expedient, la sentència en fa una valoració molt dura. Per començar, afirma que "*no puede ser considerado como tal" informe, puesto que "es tan escueto y tan exiguo, que no da razón alguna, ninguna, del acomodado de la AAI al ordenamiento urbanístico (...) Se limita a reproducir los usos permitidos y prohibidos, sin más, como si éstos no fueran conocidos*". Més endavant considera de "*suma gravedad*" que el "*pretendido informe*" (*sic*) "*intente dar vía libre a la AAI no a virtud del planeamiento vigente sino en el de un futurible, es decir, en la previsión de que en el futuro se va a aprobar un nuevo Plan General Municipal*".

Essent això important, la sentència també considera, basant-se en l'informe pericial judicial, que el Projecte Bàsic autoritzat és deficient i insuficient, assenyalant com a

defectes principals: "*sus carencias en el entorno medioambiental, la realidad de la planta de biometanización como una actividad industrial principal y autónoma, la contaminación evidente del medio ambiente, el traslado altamente relevante a dicha planta de residuos del exterior, la existencia de una central de 2 MW imposible de cubrir sin tal aportación, la contaminación de acuíferos y aguas subterráneas perjudiciales en grado sumo, la nula evaluación de afecciones en el transporte de residuos, destrucción de la fauna y la flora irreversible, en especial para especies protegidas*".

En conseqüència, la Sentència estima el recurs i anul·la l'autorització ambiental integrada.

3. Condemna a un ajuntament per sorolls excessius en una pista poliesportiva

Com és sabut, els sorolls s'han convertit en una font habitual de conflictes que acaben de manera freqüent als tribunals. Els agents emissors de sorolls molestos poden ser els més insospitats. En el cas de la Sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de 21 de gener de 2011, es tractava dels sorolls procedents d'una pista poliesportiva. La sentència recorda que la legislació de sorolls sotmet a les seves determinacions a tots els emissors acústics, siguin de titularitat pública o privada, tenint en consideració qualsevol element susceptible de generar nivells de soroll o vibracions que puguin ser causa de molèsties.

La inactivitat de l'entitat local demandada queda acreditada per les denúncies i peticions reiterades dels veïns recurrents, que van romandre sense resposta. Sobretot, es subratlla que no s'han adoptat "*medidas reales y efectivas en la praxis para ajustar el uso y funcionamiento de la citada pista polideportiva a la normativa vigente, poniendo en marcha las medidas correctoras oportunas y eficaces para paliar la situación denunciada*".

Després d'insistir en què "*la Administración no ha actuado con todos los medios disponibles a su alcance para aminorar los ruidos*", recorda la jurisprudència constitucional sobre la potencialitat del soroll per afectar de forma sensible el medi ambient i, a més, per vulnerar el dret a la intimitat personal i a la inviolabilitat del domicili, així com la salut de les persones.

Provada la inactivitat administrativa i l'existència de sorolls superiors als permesos, la sentència condemna l'Ajuntament "*para que lleve a cabo todas las actuaciones necesarias a fin de que la actividad desarrollada en la pista polideportiva de Artica no produzca inmisiones de ruido superiores a las permitidas en la normativa vigente en la vivienda de los recurrentes, debiendo para ello adoptar todas las medidas precisas que le permite la legislación, sin que este Juzgado estime pertinente la clausura temporal o definitiva de la misma en los términos interesados por la parte actora en su escrito de demanda*".

La sentència, per tant, es limita a condemnar la inactivitat de l'Administració i li ordena l'adopció de mesures correctores. Segons el meu criteri, peca de prudència excessiva, ja que permet a l'Ajuntament que —tan inactiu, passiu i tolerant amb el soroll s'havia mostrat— esculli les mesures més apropiades per acabar amb el soroll. Però la Sentència, com si no confiés massa en l'actitud del consistori o amb pretensió d'alliçonar-lo, recull "*a título de ejemplo*" (sic) algunes de les mesures correctores que podrien adoptar-se:

> "*la necesidad de cesar la totalidad de actividades que se realizan en la pista polideportiva en horario nocturno, la imposibilidad de programación de actividades musicales tanto en horario nocturno como en diurno, la necesidad de mejorar las condiciones de la pista, una reducción de la amplificación en la medida de lo posible a través de una disminución del tiempo de reverberación, la realización de un cerramiento de al menos parte de los laterales de la pista y de la parte trasera a fin de lograr un apantallamiento efectivo entra la pista y las viviendas, llevar a cabo una modificación del pavimento utilizando materiales absorbentes, la realización de un Estudio Acústico, implantar una regulación del horario de iluminación, entre otras medidas de posible realización*".

La condemna a l'adopció d'unes mesures correctores resulta, en la meva opinió, insatisfactòria, per vaga i genèrica, sobretot, a la vista de l'actitud passiva mostrada en aquest afer per l'Ajuntament. Tant de bo m'equivoqui, però em temo que el problema restarà sense resoldre i que els veïns hauran de tornar als tribunals per demanar que es concretin les mesures que garanteixin l'execució completa i correcta de la sentència.

4. Sancions ambientals

La majoria de les sentències d'aquest període han tractat de sancions ambientals. Només en una d'elles es va anul·lar la sanció per no haver-se acreditat degudament, conforme a allò que exigeix la presumpció d'innocència, la causalitat entre les substàncies abocades i l'activitat de l'empresa sancionada (Sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 1, de 4 de juliol de 2011).

En les sentències restants es van confirmar les sancions imposades. Dues d'elles van ser en matèria de caça. En la STSJ de Navarra de 29 de juliol de 2011 es va confirmar la sanció imposada per l'ús de munició prohibida i per l'obstaculització de la tasca inspectora de la policia, quan l'imputat va provar d'amagar les armes utilitzades. L'altra sentència (STSJ de Navarra de 23 de març de 2011) té una mica més d'interès, especialment, la seva afirmació de què la presumpció de veracitat dels fets constatats per la policia és suficient per destruir la presumpció d'innocència i inaplicar el principi *in dubio pro reo*, perquè aclareix qualsevol dubte sobre els fets. També es va rebutjar la vulneració de la prohibició del *bis in idem* perquè el mateix fet era constitutiu de dues infraccions (caçar en un vedat per al que no es té llicènica i caçar en un lloc qualificat de reserva) i, a més, es va imposar una sola sanció.

En la Sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 d'11 d'octubre de 2011, es van qüestionar diferents aspectes formals i diversos principis de la potestat sancionadora de l'Administració. Finalment, es va confirmar la sanció imposada per excés d'emissions. D'una banda, es van rebutjar determinades irregularitats temporals (l'anticipació per un dia de la incoació del procediment sancionador pel Departament de Medi Ambient sense esperar que transcorregués el mes d'inactivitat de l'Administració local) i formals (plec de càrrecs que no contenia tots els requisits legals) per considerar que no implicaven una indefensió patent i real per a l'afectat, ni la impossibilitat de l'acte d'arribar a la seva finalitat.

Quan al principi de culpabilitat, es rebutja que s'hagués vulnerat, en considerar que el recurrent "*tuvo un largo plazo para adaptar sus instalaciones a las exigencias legales y reglamentarias, por lo que no cabe invocar la complejidad de la materia o los esfuerzos realizados*". Tampoc no s'aprecia il·licitud en la qualificació de la infracció com a greu, malgrat que no es quantifiqui l'excés de les emissions fins a la resolució del recurs d'alçada. N'hi ha prou amb l'acreditació de què es superaven àmpliament els límits

d'emissions perquè la qualificació de la infracció com a greu es consideri realitzada correctament. Finalment, es rebutja l'absència de proporcionalitat en haver-se imposat la sanció en la seva quantia mínima.

5. Relació de sentències

a) Sentències del Tribunal Superior de Justícia de Navarra (Sala contenciosa administrativa)

STSJ de Navarra de 23 de març de 2011, ponent Galve Sauras. Sanció en matèria de caça. Presumpció de veracitat dels fets constatats per funcionaris públics. Vulneració del *non bis in idem* inexistent.

STSJ de Navarra de 29 de juliol de 2011, ponent Merino Zalba. Confirmació de sanció en matèria de caça por el uso de munició prohibida i per obstaculitzar la tasca inspectora.

STSJ de Navarra de 22 d'octubre de 2011, ponent Merino Zalba. Anul·lació d'autorització ambiental integrada de una granja amb planta de biometanització de residus orgànics. Activitats no vinculades a efectes urbanístics i no autoritzables en sòl no urbanitzable. Informe de compatibilitat urbanística basat no en el pla vigent, sinó en una futura modificació del planejament urbanístic.

b) Sentències de los Jutjats contenciosos administratius.

Sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 3, de 21 de gener de 2011. Condemna a un ajuntament para establir les mesures necessàries per eliminar los sorolls excessius en una pista poliesportiva.

Sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 1, de 4 de juliol de 2011. Sanció per abocament que se anul·la por no provar-se la causalitat entre las substàncies abocades i l'empresa sancionada.

Sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 1, de 19 d'agost de 2011. Danys causats en arbrat por esquirols. Desestimació de la reclamació per error en la identificació de la parcel·la.

Sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 1, de 22 de setembre de 2011. Responsabilitat de l'Administració com a titular de la via pública on es va produir un accident de circulació por atropello de un cabirol.

Sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 2, de 11 d'octubre de 2011. Confirmació de sanció por excés de emissions. Irregularitats temporals i formals no invalidants. Proporcionalitat y culpabilitat provades.

Sentencia del Juzgado contenciós administratiu núm. 1, de 31 d'octubre de 2011. Caducitat de la llicència d'activitat classificada por inactivitat en l'execució.